

á pesar de haber obtenido sentencia favorable en el interdicto de obra nueva que entabló ante el Juzgado 1º del ramo civil de Guadalajara, contra las obras que se emprendieron para impedir el uso de la parte de convento que ocupaba; el General Junguito ha persistido en continuar las obras, negándose á obedecer el fallo, cuyos procedimientos constituyen en concepto del quejoso, una violación de las garantías que otorgan los artículos 16, 17 y 27 de la carta fundamental de la República.

Considerando: que por el artículo 27 de la Constitución federal, ninguna corporación eclesiástica tiene capacidad legal para adquirir en propiedad ó administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al culto.

Que por lo mismo, el Presbítero D. Francisco Rodríguez, como representante del clero, ha ocupado la parte del convento que reclama sin título alguno, para el cual pueda considerársele como propietario, como administrador ni como poseedor.

Que para esa propiedad ó posesión, tampoco puede alegar títulos personales, supuesto que no aparece como comprador, ni como adjudicatario.

Que en consecuencia, habiendo pasado el convento de San Francisco de Guadalajara, al dominio de la nación, sin su consentimiento ninguna persona puede habitarlo.

Que los procedimientos del General Junguito, podrán motivar una responsabilidad para cuya reclamación tiene á salvo sus derechos el agraviado; pero de ninguna manera alteran los derechos de propiedad que posee la Nación.

Que por tales consideraciones, aparece que no ha habido violación de garantías en la persona del Presbítero D. Francisco Rodríguez.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta. Primero: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Dis-

trito de Jalisco en 10 de Octubre del presente año, que declaró haber lugar al amparo federal. Segundo: la Justicia de la Unión no ampara ni protege al Presbítero D. Francisco Rodríguez, contra la ocupación por una fuerza de artillería, y de órden del General Junguito, de la parte del convento de San Francisco que le servía de habitación.

Devuélvanse la actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzmán.*—*L. Velásquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Larra,* secretario.

Es copia. México, Enero 7 de 1873.  
*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor interino.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua por el C. Ramon Irigoyen, contra el C. Jefe político del Distrito de Iturbide, por violación de garantías.*

PREMIENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El encargado interinamente de la Gerencia de Hacienda del Estado, cumpliendo con la ley que le impone el deber de llevar la voz fiscal por impedimento del C. Promotor, dice: que en su opinión, no es de accederse á la solicitud que hace el C. Ramon Irigoyen en su anterior ocurno, en que pide se abra á prueba este negocio, en atención á las razones que paso á exponer: El artícu-

lo 10 de la ley de 20 de Enero de 1869, en que el Sr. Irigoyen funda su pretension, establecer que cuando el Juez creyere necesario esclarecer algun punto de hecho, mandará recibir el negocio á prueba por un término comun que no exceda de ocho dias, de modo que, siempre que á juicio del Juzgado no haya esa necesidad, dejará de tener lugar la prueba: ahora bien, la regla general que tenemos para fijar los casos en que procede la prueba, consiste en la naturaleza de la controversia que se suscita; si esta se versa sobre un punto de hecho, es innegable que el negocio ó asunto de que se trate, deberá recibirse á prueba; mas si se versa acerca de un punto de derecho, como solo se trata de la aplicacion de la ley, es improcedente aquella.

Con toda esta verdad, deberemos pues averiguar si en el caso que nos ocupa, la controversia es de hecho ó de derecho, pues así sabremos si procede ó no la prueba. El mismo Sr. Irigoyen, tiene como yo la conciencia de que no hay en este negocio ningun hecho controvertible, y por esto es que no lo ha fijado en su escrito, sino que solamente ha solicitado la prueba para el caso posible de que haya algunos puntos de hecho, que deban comprobarse, y una solicitud concebida en términos tan generales é injustificados, entiendo que debe ser desechada, principalmente cuando como he dicho, la cuestion no se versa sobre un punto de hecho.

Por tanto, pido se sirva decretar que no es de admitirse la preba que solicita el C. Ramon Irigoyen en su repetido ocurso.

Chihuahua, 30 de Setiembre de 1873.  
—Jesus Miramontes.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Chihuahua, Octubre 11 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Ramon Irigoyen, contra el Gefe político de este Distrito, por considerar el quejoso

violada en su persona la garantía del artículo 24 de la Constitucion federal, con el hecho de reunirse por segunda vez el jurado de sentencia que lo juzgó y absolvió en el juicio de imprenta que le entabló el C. Lic. José María Porras, por el impreso que publicó y circuló Irigoyen, el 21 de Junio último. Visto lo que expresó el C. Gefe político de este Distrito en sus informes de 2 y 3 de Julio próximo pasado. Vistas todas las demas constancias de autos que deben tenerse presentes.

Considerando: que conforme á los artículos 33 y 41 de la ley orgánica de la libertad de imprenta, expedida en 31 de Enero de 1868 y sancionada el 4 de Febrero del mismo año, los juicios de imprenta son inapelables, y ninguna otra autoridad mas que las señaladas en la misma ley, puede intervenir en los juicios de imprenta.

Que segun el documento de fojas 3 y 4 de estos autos, y el oficio de la Secretaría del Gobierno del Estado de fojas 11, el Jurado de sentencia que se reunió el 27 de Junio, infringiendo el artículo 28 de la citada ley de imprenta, absolvió á Irigoyen, y el C. Gobernador del Estado en virtud de la queja del C. Lic. José María Porras, mandó que volviese á reunirse el mismo Jurado, resultando de esta providencia, que el 2 de Julio próximo pasado se reunió el repetido Jurado, y en contradiccion con su primer fallo, condenó á Irigoyen á quince dias de prision.

Que conforme á derecho, ni los Jueces ni los tribunales pueden legalmente en ningun caso, reformar ó revocar las sentencias definitivas que ellos mismos hayan pronunciado, en los negocios de su competencia.

Que habiéndose observado en el juicio de imprenta de que se viene hablando, todos los requisitos y solemnidades prescritas en la repetida ley de la libertad de imprenta, desde la denuncia hecha por el C. Lic. Porras hasta el fallo definitivo pronunciado por el Jurado de sentencia que se reunió el 27 de Junio último, segun expresa el Mi-

nisterio público en su pedimento de 18 de Setiembre que se registra á fojas 21 de estos autos, no puede decirse que no hubo juicio aun cuando la sentencia adolezca de algun vicio ó defecto, ya sea por error, ya por malicia.

Que en el presente caso, no se reclama acto alguno de los Jurados de calificación y sentencia ejecutada en el legal ejercicio de sus funciones, y en virtud de las facultades que les concede la respectiva ley orgánica, sino el de la autoridad política, que reunió por segunda vez el Jurado de sentencia, acto que sin duda no está comprendido en el artículo octavo de la ley de 20 de Enero de 1869, reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Carta fundamental de 1857.

Que el 27 de Junio, el Jurado de sentencia pronunció fallo definitivo absolviendo á Irigoyen, y el mismo Jurado reunido por segunda vez el 2 de Julio, volvió á fallar definitivamente, condenándolo á sufrir quince días de prision, lo que está expresa y terminantemente prohibido en la Constitución de 1857.

Por tales consideraciones, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, y artículos 101 y 102 de la suprema ley repetidas veces citada, se falla con las proposiciones siguientes: Primera: la Justicia de la Union ampara y protege al C. Ramon Irigoyen, contra el acto del C. Gefe político de este Distrito, que reunió por segunda vez el Jurado de sentencia, que condenó al repetido Irigoyen á quince días de prision, por violarse en su persona con este hecho, la garantía que concede el artículo 24 del repetido Pacto federal. Segunda: hágase saber, y mándense los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision, sacándose previamente copias de este fallo para la publicación en el Semanario Judicial de la Federación, y Periódico Oficial del Supremo Gobierno del Estado.

El C. Juez, definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó por ante mí, de lo que

doy fé.—*Lic. José Hierro.*—*Abraham Eriberto Perez*, secretario.

Es copia que certifico. Chihuahua, 11 de Octubre de 1873.—*Lic. José Hierro.*—*Abraham Eriberto Perez*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 20 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Chihuahua, por el C. Ramon Irigoyen, contra la providencia dictada por el Gefe político de la Capital del Estado, á instancia del Gobernador del mismo, mandando reunir de nuevo el Jurado de sentencia, que en un juicio de imprenta seguido contra el quejoso por el Lic. José María Porras, le había absuelto en su primera reunion, infringiendo la ley de la materia de 4 de Febrero de 1868, con cuya providencia se ha violado en sentir del promovente, la garantía que consigna el artículo 14 de la Constitución federal, y considerando: que aun cuando la primera declaracion del Jurado de sentencia absolviendo de toda culpa al acusado Irigoyen, fué una infraccion manifiesta de la ley orgánica de la prensa, artículo 28, que no le concedía facultad alguna para resolver sobre si había habido culpabilidad ó no, sino únicamente para determinar el grado de esta, aplicando la pena correspondiente; sin embargo; no permitiendo la ley mencionada, artículo 41, tener intervencion en los asuntos de imprenta y librería á otras autoridades que las que ella enumera, entre las cuales no están comprendidos los Gobernadores y Gefes políticos, las providencias dictadas por el Gefe político de Chihuahua á instancias del Gobernador del Estado, constituyen igualmente una infracción de la mencionada ley. Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito, en 11

de Octubre del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Ramon Irigoyen, contra el acto del C. Gefe político de Chihuahua, que reunió por segunda vez el Jurado de sentencia y que lo había absuelto anteriormente.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José Maria Iglesias.*—*José Maria Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 10 de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor interino.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por el Lic. Pedro Delgado, contra los procedimientos del segundo Juez suplente del mismo Distrito, que mandó fomarle causa y declaró haber méritos para decretar la prision, señalándole como lugar de arresto la Ciudad de Guanajuato.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: El Sr. Lic. D. Pedro Delgado ha promovido el presente recurso de amparo, contra los procedimientos del C. Juez segundo suplente de Distrito, Lic. Ignacio Ayala, como opuestos á los artículos 14, 16, 17 y 18 de la Constitucion federal.

El Sr. Delgado, como magistrado supernumerario del Supremo Tribunal del Estado, conoció en tercera instancia de un artículo sobre incontestacion de demanda en un juicio civil que ante los tribunales del Estado siguen los Sres. D. Juan Pitman y D. Carlos Hangk, cuyo artículo fue fallado condenando á la parte de Hangk á contestar la demanda y á pagar las costas que se hubieren causado, y una multa de cincuenta pesos. El apoderado sustituto de Hangk, Lic. Agustin Obregon, pidió amparo contra los procedimientos del Sr. Delgado, solicitando la suspension de la sentencia pronunciada contra su poderdante, á cuya solicitud no se accedió. Este último juicio de amparo siguió por todos sus trámites hasta presentar las partes sus alegatos, en cuyo estado el Sr. Obregon recusó al C. Juez propietario, y habiéndose admitido la recusacion, pasaron los autos al C. Juez primero suplente, quien se excusó de conocer en él. Calificada la excusa de bastante, tomó conocimiento de este negocio el C. Juez segundo suplente de Distrito Lic. Ignacio Ayala, á quien se remitieron los autos desde el dia 19 de Febrero próximo pasado; pero por haber estado ausente de esta Capital, no los recibió sino hasta el dia 20 de Marzo, en cuya fecha se avocó el conocimiento de ellos. Sin embargo de ser perentorios los términos en los juicios de amparo que deben seguirse aunque no agiten las partes, pasaron siete dias sin que el Sr. Ayala citara para sentencia; sino que despues de este tiempo dictó una orden suspendiendo los procedimientos de Sr. Delgado. El que suscribe no tuvo conocimiento de esta determinacion apesar de ser parte, ignorando las providencias que se decretaron para ejecutarla, como consta en estas actuaciones, ni podia esperar que se dictara, supuesto el estado de los autos y principalmente porque se había negado al principio del juicio la suspension del acto reclamado por el C. Juez propietario, no concediendo el artículo 6 de la ley de 20